

Nº 254/12/P/I

Rosario, 24 de octubre de 2012.-

Visto, en Acuerdo de la Sala "A" el expediente Nro. 3821-P de entrada, caratulado: "Multicanal S.A. -Cablevisión S.A. s/ Inf. a la Ley 22.262" (Expte. Administrativo Nro. S01 023414/1998), del que resulta:

1.- Se encuentra la causa a estudio del Tribunal en virtud de los recursos extraordinarios interpuestos por el apoderado de las actoras, con el patrocinio letrado del Dr. Gonzalo Maderna (fs. 124/144 y vta.), y por la representante del Estado Nacional, Dra. María Belén Marín (fs. 145/159 y vta.), contra el Fallo Nº 12/P/Def (fs. 109/120) dictado por esta Sala en fecha 4 de junio de 2012.

A fs. 160 se corre traslado a las partes interesadas, quienes exponen a fs. 172/180 y 181/199, los fundamentos por los que solicitan se rechace el recurso interpuesto por la parte contraria por resultar manifiestamente improcedente, con costas.

A fs. 200 se dispone el pase de las actuaciones al Acuerdo, quedando éstas en estado de resolver.

2.- Plantea la representante de las actoras Multicanal SA y Cablevisión SA, que existe cuestión federal que habilita la vía extraordinaria, toda vez que en la resolución recurrida se han violado los derechos de defensa en juicio y de petición a las autoridades al considerarse improcedente la prescripción impetrada. Alegan también que se han desconocido los motivos y fundamentos que demuestran la improcedencia de la imputación y posterior imposición de la sanción y que sus mandantes no han contravenido artículo alguno de las leyes 22.262 y 25.156. Señaló que arbitrariamente se ha omitido revisar la multa impuesta por la autoridad de aplicación.

3.- Por su parte la representante del Estado Nacional alegó que existe cuestión federal en los términos del artículo 14, inc. 3 de la ley 48 toda vez que se encuentran involucradas la interpretación de normas de carácter federal tales como las leyes 22.262 y 25.156, el Dictamen de la CNDC 678/10 y la Resolución SC1 219/10. Señaló que la sentencia es arbitraria y que existe gravedad institucional dado la trascendencia del tema planteado.

Y considerando que:

1.- En primer término corresponde examinar la admisibilidad de los recursos interpuestos, a la luz del cumplimiento de los requisitos formales por parte de las impugnantes.

En tal sentido se advierte que aquéllos han sido interpuestos dentro del término establecido por el art. 257 del C.P.C.C.N., ante el tribunal que dictó el fallo que se ataca, las reservas del caso federal han sido efectuadas oportunamente, ambos escritos recursivos pueden reputarse autónomos según las exigencias de nuestro más Alto Tribunal, y el pronunciamiento impugnado es una sentencia definitiva. Asimismo, los recurrentes han cumplido cabalmente las previsiones de la Acordada Nro. 4/07 de la CSJN.

2.- Respecto a la cuestión federal que se invoca fundada en haber sido controvertida la interpretación de normas federales (Leyes 22.262 y 25.156), que ha sido alegado por ambas partes, habiéndole el fallo asignado un alcance distinto al que los recurrentes basan sus agravios, corresponde hacer lugar a los planteos deducidos, recordando que en tal sentido nuestro más Alto Tribunal ha dicho que *"De acuerdo con lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48, procede el recurso extraordinario cuando se cuestiona la interpretación de una norma de carácter federal"* (Fallos: 302:1123 y 301:673- cfr. Fallos nro. 15/08-C, 250/10P, 144/10P, 5/12P, entre muchos otros, de este Tribunal).

En consecuencia, por las razones expuestas y desde que lo realmente impugnadores la interpretación de normas de carácter federal, resultan admisibles los recursos extraordinarios deducidos a este respecto.

3.- Con relación a la alegada arbitrariedad, que la representante del Estado Nacional sostiene, entiende este Tribunal que la impugnante no ha subsumido correctamente los agravios que invoca en ninguna de las hipótesis doctrinarias y jurisprudenciales que se han ido recortando en el tiempo como aquéllas que habilitan el acceso a la instancia de excepción que implica en el caso el conocimiento por parte de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como se ha sostenido reiteradamente no

constituye una tercera instancia ordinaria. Este Tribunal -con distinta composición- ha dicho que "La sentencia arbitraria es aquélla desprovista de todo apoyo legal, fundada tan sólo en la voluntad de los jueces. El vicio de arbitrariedad debe ser grave, dicha sentencia debe padecer de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que la descalifiquen como pronunciamiento judicial" (cfr. v. Sagües, "Recurso extraordinario", T.II, pág. 576 y 579, Ed. Depalma, 1984) (CFAR fallo 673/92). Nuestro más Alto Tribunal ha declarado que: "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por finalidad abrir una nueva instancia ordinaria donde puedan discutirse cuestiones de hecho, de derecho procesal, ni la corrección de fallos equivocados o que se consideren tales, sino que sólo admite los supuestos desaciertos y omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional" (Fallos 311:1950); "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto constituir, a la Corte Suprema, en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que le son propias, sino que requiere, para su procedencia, que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación" (Fallos: 311:2187; cfr. 306:1111-1395-2056; 311:345-571-786-904-1668-2375), lo que no se advierte en autos.

De manera tal que la discrepancia de la recurrente con lo resuelto no pasa de eso, mera discrepancia, con la solución adoptada en esta instancia. Solución que se exhibe como una de las posibles en el caso dentro del marco de los hechos y el derecho aplicable. Y sabido es que como lo sostuvo Kelsen en su célebre obra, "... la norma es un marco abierto a varias posibilidades" ("Teoría Pura del Derecho", Capítulo III). Lo que en otros términos significa que en muchos casos las respuestas jurisdiccionales pueden ser diversas sin que ello implique, necesariamente, que alguna de ellas resulte susceptible de ser válidamente tildada de arbitraria, si es razonable y encuadra dentro del referido "marco". Así se ha dado en el presente caso, razón por la cual, entendemos, la vía

intentada debe ser rechazada por inadmisible.

4.- La misma suerte, por cierto, le cabe a la vía intentada en lo que respecta a la gravedad institucional que se esgrime. En este sentido, consideramos que si bien en algunos casos jurisprudenciales, tomando en cuenta la trascendencia e interés institucional de la cuestión se ha dejado de exigir o atemperado el rigor con respecto a la observancia de ciertos requisitos para la admisión de la alzada extraordinaria, ello ha ocurrido solamente cuando la decisión recurrida afectaba el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales o de las instituciones básicas de la Nación o comprometía la recaudación de las rentas del Estado, situaciones éstas que no se dan en el caso en revisión en tanto lo resuelto no afecta ninguno de los trascendentes aspectos reseñados. Por tal razón no resulta admisible el remedio extraordinario tampoco por dicha causal.

5.- En función de cuanto se acaba de exponer, corresponde la admisibilidad de los Recursos Extraordinarios planteados contra el Acuerdo de esta sala N° 12/P/Def, del 4 de junio de 2012 exclusivamente por la causal de cuestión federal simple invocada por las partes al articularlos.

Por tanto,

**SE RESUELVE:**

- 1.- Conceder los recursos extraordinarios deducidos por las actoras Multicanal SA y Cablevisión SA y por el Estado Nacional, exclusivamente por la causal de cuestión federal simple.
- 2.- Declararlos inadmisibles con fundamento en las invocadas causales de arbitrariedad y gravedad institucional.
- 3.- Insértese, hágase saber y, oportunamente, remítanse las presentes actuaciones a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación a sus efectos, oficiándose. No participe del Acuerdo que antecede el Dr. Carlos F. Carrillo por encontrarse inhibido.-

FERNANDO LORENZO BARBARÁ  
JUEZ DE CÁMARA

LILIANA ARRIBILLAGA  
JUEZA DE CÁMARA